



**Resolución No. CSJBOR23-1294**  
**Cartagena de Indias D.T. y C., 17 de octubre de 2023**

*“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”*

**Vigilancia judicial administrativa No:** 13001-11-01-002-2023-00733

**Solicitante:** Tania Lucia Correa Núñez

**Despacho:** Juzgado 5° de Familia del Circuito de Cartagena

**Servidor judicial:** Rodolfo Guerrero Ventura y Carlos Mario Zapata Rambal

**Tipo de proceso:** Exoneración de alimentos

**Radicado:** 13001-31-10-005-2008-00141-00

**Magistrado ponente:** Iván Eduardo Latorre Gamboa

**Fecha de sala:** 11 de octubre de 2023

## I. ANTECEDENTES

### 1.1 Solicitud de vigilancia judicial administrativa

Por mensaje de datos recibido el 30 de agosto de 2023, la abogada Tania Lucia Correa Núñez presentó memorial remitido al Juzgado 5° de Familia del Circuito de Cartagena, con copia al correo electrónico de esta Corporación. Del escrito presentado, se observó que no se indicó de manera expresa que se trata de una solicitud de vigilancia judicial administrativa, así como tampoco se precisó la situación o actuación que se encuentra en mora por parte del despacho encartado, por lo que mediante Auto CSJBOAVJ23-C12 del 13 de septiembre de 2023, se requirió para que informara si lo pretendido era dar inicio al mecanismo administrativo mencionado. Dentro del término concedido la peticionaria subsanó el escrito.

Del escrito allegado, se tiene que la abogada Tania Lucia Correa Núñez, solicita vigilancia judicial administrativa sobre el proceso identificado con radicado No. 13001-31-10-005-2008-00141-00, que cursa en el Juzgado 5° de Familia del Circuito de Cartagena, debido a que, según indica, se encuentra pendiente de resolver solicitud de fijación de fecha para llevar a cabo audiencia.

### 1.2 Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3° del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante Auto CSJBOAVJ23-979 del 3 de octubre de 2023, se dispuso requerir a los doctores Rodolfo Guerrero Ventura y Carlos Mario Rambal Zapata, juez y secretario, respectivamente, del Juzgado 5° de Familia del Circuito de Cartagena, para que suministraran información detallada del proceso referenciado, el cual fue comunicado mediante mensaje de datos el 4 de octubre del año en curso.

### 1.3 Informe de verificación

Dentro de la oportunidad concedida para ello, el doctor Rodolfo Guerrero Ventura, juez, rindió informe bajo la gravedad de juramento (artículo 5° Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011). Indica que mediante providencia del 19 de mayo de 2023 se admitió la demanda de la referencia, actuación que fue notificada en estado del 25 de mayo de la presente anualidad.

Que por auto del 4 de octubre de 2023, se tuvo por notificada a la parte demandada, por no contestada la demanda y se ordenó pasar al despacho el expediente para proferir sentencia escrita.

Por lo anterior, afirma que el despacho no ha incurrido en una circunstancia que se pueda considerar vulneradora de los derechos fundamentales del accionante, comoquiera que al proceso se le ha dado el trámite correspondiente, y que en caso de presentarse alguna tardanza, ello ha obedecido al cúmulo de solicitudes que les corresponde atender a diario y al incremento en la recepción de acciones constitucionales.

Que al asumir el cargo, el 15 de julio de 2022, encontró un inventario final de 963 procesos, cifra que se redujo a 764, la cual se encuentra por encima de la capacidad máxima de respuesta fijada a los juzgados del circuito de familia, por lo que solicita el archivo de la presente actuación al no existir ninguna circunstancia que edifique mora en la actuación.

## II. CONSIDERACIONES

### 2.1 Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la abogada Tania Lucia Correa Núñez, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la petición se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

### 2.2. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales, porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

### 2.3. Planteamiento del problema a resolver

Conforme a la solicitud de vigilancia judicial administrativa y lo informado por el funcionario judicial requerido, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un actuar u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que la solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra los servidores judiciales involucrados.

### 2.4. Caso concreto

La abogada Martha Fernández González solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso de fijación de cuota de alimentos identificado con el radicado No. 13001311000520230031600, que cursa en el Juzgado 5° de Familia del Circuito de Cartagena, debido a que, según indica, se encuentra pendiente de resolver la solicitud de fijación de fecha para audiencia.

Respecto de las alegaciones de la solicitante, indica el doctor Rodolfo Guerrero Ventura, juez, que mediante providencia del 4 de octubre de 2023 se tuvo por notificada a la parte demandada, por no contestada la demanda y se ordenó pasar al despacho el expediente para proferir sentencia escrita.

Examinadas la solicitud de vigilancia judicial administrativa, el informe rendido bajo la gravedad de juramento y los documentos aportados, esta Seccional encuentra demostrado que en el trámite del proceso se surtieron las siguientes actuaciones:

No	Actuación	Fecha
1	Auto que admite la demanda	25/05/2023
2	Memorial mediante el cual se aportan las certificaciones de notificación de la demanda y el auto admisorio	17/06/2023
3	Solicitud de fijar fecha para audiencia	25/07/2023
4	Memorial de impulso	30/08/2023
5	Ingreso al despacho	04/10/2023
6	Auto que resuelve tener por notificada a la parte demandada, tener por no contestada la demanda, y ordena ingresar al despacho el expediente para proferir sentencia escrita	04/10/2023
7	Comunicación requerimiento de información realizado por esta Corporación	04/10/2023

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se ciñe a la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado 5° de Familia del Circuito de Cartagena en pronunciarse sobre la solicitud de

fijar fecha para llevar a cabo audiencia.

Se observa que, según el informe rendido por el titular del despacho, por auto adiado 4 de octubre de 2023 se resolvió tener por notificada a la parte demandada y por no contestada la demanda, mismo día en que se llevó a cabo la comunicación del requerimiento de informe realizado dentro de la solicitud de vigilancia judicial.

La anterior situación conduce a inferir que se está frente a actuaciones que fueron adelantadas el mismo día en que se le comunicó este procedimiento administrativo a la célula judicial. Al respecto, esta Corporación ha venido sosteniendo que para estos casos se ignora que fue primero, si la notificación de esta actuación administrativa o el trámite surtido por el despacho, empero, de conformidad con el principio de **indubio pro vigilado**, se considera que esta última fue anterior.

En otras palabras, en el presente caso no es posible alegar la existencia de mora judicial presente, como quiera que para el momento en que se comunicó el requerimiento de rendir informe dentro del trámite de solicitud de vigilancia judicial administrativa, se habían resuelto las solicitudes alegadas, lo que impide seguir adelante con este mecanismo, pues de los artículos 1° y 6° del Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, *“por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6°, de la Ley 270 de 1996”*, se infiere razonablemente que la finalidad de esta actuación administrativa es procurar por la eficiente prestación del servicio de administración de justicia para casos de sucesos de mora presentes, no en los pasados.

Este principio ha sido acogido por la seccional en virtud del determinado por la Corte Constitucional en sentencia C- 224-96 del 30 de mayo de 1996, reiterada en la T-1102 de 2005, la cual si bien hace alusión a la aplicación de un principio de materia penal en los procesos disciplinarios, se aplica por analogía y teniendo en cuenta que las consecuencias del mecanismo de la vigilancia judicial se constituyen en una sanción administrativa que trae consecuencias negativas en la calificación de los servidores judiciales.

Asunto sobre el cual la Corte puntualizó: *“...Ahora bien: el principio general de derecho denominado “in dubio pro reo” de amplia utilización en materia delictiva, y que se venía aplicando en el proceso disciplinario por analogía, llevó al legislador a consagrar en la disposición que hoy se acusa, el in dubio pro disciplinado, según el cual, toda duda que se presente en el adelantamiento de procesos de esta índole, debe resolverse en favor del disciplinado...”*.

Así, se tendrá que la actuación fue anterior a la comunicación del auto emitido por esta Corporación.

Respecto la actuación del doctor Rodolfo Guerrero Ventura, juez, se observa que el proceso ingresó al despacho el 4 de octubre de 2023. El mismo día se profirió auto que resolvió tener por notificada a la parte demandada y tener por no contestada la demanda, por lo que la actuación se encuentra dentro del término establecido en el artículo 120 del Código General del Proceso.

**“ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el**

*expediente pase al despacho para tal fin (...)*”.

Por lo que, al no encontrarse configurada una situación de mora judicial por parte del funcionario, será del caso archivar el presente trámite administrativo respecto de este.

Ahora, con relación al secretario, se vislumbra que entre la presentación de las solicitudes los días 17 de junio y 30 de agosto de 2023, y el ingreso al despacho el 4 de octubre siguiente, transcurrieron 65 y 18 días hábiles, respectivamente, de manera que la actuación se encuentra por fuera del término dispuesto en el artículo 109 del Código General del Proceso.

*“ARTÍCULO 109. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES E INCORPORACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes (...)*”.

En consonancia a lo consagrado en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, a saber:

*“ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según*

*corresponda, los siguientes:*

*(...)*

*2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo. (...)*

*5. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados. (...)*

*20. Evitar la lentitud procesal, sancionando las maniobras dilatorias, así como todos aquellos actos contrarios”.*

Se observa, entonces, la tardanza en la que incurrió el doctor Carlos Mario Zapata Rambal, secretario del Juzgado 5° de Familia del Circuito de Cartagena, sin que se hayan indicado argumentos o circunstancias que justifiquen el ingreso tardío del proceso al despacho para su trámite, por lo que al estar ante una posible conducta disciplinable, habrá de ordenarse la compulsión de copias de la presente actuación con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para que investigue la conducta desplegada por el servidor, conforme al ámbito de su competencia.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

### III. RESUELVE

**PRIMERO:** Archivar la vigilancia judicial administrativa promovida por la abogada Tania Lucia Correa Núñez, dentro del proceso de exoneración de alimentos identificado con el radicado No. 13001-31-10-005-2008-00141-00, que cursa en el Juzgado 5° de Familia del Circuito de Cartagena, por las razones anotadas.

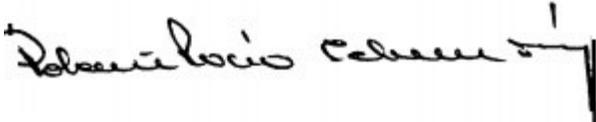
**SEGUNDO:** Compulsar copias de la presente actuación con destino a la Comisión Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.  
Teléfono: 6647313. [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)  
Correo electrónico: [consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Cartagena – Bolívar. Colombia

Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar para que, en atención a lo anotado, investigue la conducta desplegada por el doctor Carlos Mario Rambal Zapata, secretario del Juzgado 5° de Familia del Circuito de Cartagena, de conforme al ámbito de su competencia.

**TERCERO:** Comunicar la presente decisión a la peticionaria, así como a los doctores Rodolfo Guerrero Ventura y Carlos Mario Rambal Zapata, juez y secretario, respectivamente, del Juzgado 5° de Familia del Circuito de Cartagena.

**CUARTO:** Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



**PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ**  
Presidenta

MP. IELG/MFLH